



Boletín Oficial

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

PARTE OFICIAL

PRESENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS

S. M. la Reina Nuestra Señora (O. D. G.) y su augusta Real Familia continúan en esta corte sin novedad en su importante salud.

ARTICULO DE OFICIO.

PRIMERA SECCION.

GOBIERNO DE PROVINCIA.

Número 39.

En la Gaceta de Madrid número 171 del martes 5 de junio se lee lo siguiente:

Real orden declarando innecesaria la autorización solicitada por el Juez de primera instancia de Logroño para procesar al Alcalde de Albelda, y mandando al Gobernador de la provincia de Logroño al Juez de primera instancia de la capital para procesar al Sr. Julián Zorzano, Alcalde de Albelda, han consultado lo siguiente:

Excmo. Sr.: Remitido a informe de las Secciones de Estado, Gracia y Justicia, Gobernación y Fomento del Consejo de Estado el expediente de autorización, con diligencia por el Gobernador de la provincia de Logroño al Juez de primera instancia de la capital para procesar al Sr. Julián Zorzano, Alcalde de Albelda, han consultado lo siguiente:

Que el Juez pidió la autorización de que se trata, estimando de acuerdo con el Promotor fiscal, que puede resultar el Alcalde responsable de tales actos, su puesto que acordó la prisión, cuando no habiéndose cometido el desacato que peticionaba la Audiencia, no existían aun méritos para la formación de causa.

Que el Gobernador, oído el Consejo provincial, negó la autorización por lo que se refiere a la detención del vecino o imposición de grillos candentes, entendiéndose que lo primero fué una medida de orden público, y lo segundo no aparece probado, y la concedió por haber mandado poner grillos:

Considerando:

Que el Juez de Albelda debió proceder como delegado de la Autoridad judicial desde el momento en que la conducta del vecino que maltrataba a su mujer y a varios particulares dio con estos actos motivo bastante para la formación de causa.

Que en tal concepto la detención del mencionado vecino y la imposición de grillos con una barra candente deben estimarse como actos ejecutados por el Alcalde cuando obraba o debía obrar en concepto de delegado de la autoridad judicial o independientemente de sus funciones administrativas.

Las Secciones opinan que debe declararse innecesaria la autorización solicitada por el Juez de primera instancia de Logroño.

Y habiéndose dignado S. M. la Reina (O. D. G.) resolver de conformidad con lo consultado por las referidas Secciones, de Real orden lo comunico a V. E. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 29 de mayo de 1860.—José de Posada Herrera.—Sr. Ministro de Gracia y Justicia.

Número 395.

En la Gaceta de Madrid número 175 del jueves 21 de junio se lee lo siguiente:

ma. Alcalde, dispuso que se le pusieran grillos.

Que al cumplir esta última disposición, dijo el preso que una barra de los grillos quemaba, y aun cuando varios de los presentes la tuvieron en la mano y se le echó agua para satisfacer al preso, insistió éste siempre en que quemaba, lo cual han negado en sus declaraciones todos los testigos presenciales.

Que conducido el preso al siguiente día a la capital del Juzgado, declararon los cirujanos que las ampollas o vejigas que tenía en la parte posterior e inferior de ambas piernas parecían hechas por fuego o por algún cuerpo muy candente; y más adelante, ampliando esta declaración, añadieron los mismos facultativos que también podían provenir dichas heridas del roce con los zapatos y el pantalón, o algún otro cuerpo duro, bajo la influencia del calor propio de la estación que debió experimentar el preso en el camino.

Que la Audiencia del territorio condenó dicho preso a cinco meses de arresto mayor y 10 duros de multa por delito de desacato, a ocho días de arresto menor y reprensión por los malos tratamientos a su mujer, a dos días de igual arresto y reprensión por haber injuriado de obra en el mismo acto a un convecino suyo, y por último a las costas y gastos del juicio.

Que además dispuso la Audiencia en la misma sentencia que se procediese en pieza separada a lo que hubiere lugar sobre el arresto del penado y haberle puesto grillos, con la circunstancia de tener estos la barra caliente causándole quemaduras.

Que el Juez pidió la autorización de que se trata, estimando de acuerdo con el Promotor fiscal, que puede resultar el Alcalde responsable de tales actos, su puesto que acordó la prisión, cuando no habiéndose cometido el desacato que peticionaba la Audiencia, no existían aun méritos para la formación de causa.

Que el Gobernador, oído el Consejo provincial, negó la autorización por lo que se refiere a la detención del vecino o imposición de grillos candentes, entendiéndose que lo primero fué una medida de orden público, y lo segundo no aparece probado, y la concedió por haber mandado poner grillos:

Considerando:

Que el Juez de Albelda debió proceder como delegado de la Autoridad judicial desde el momento en que la conducta del vecino que maltrataba a su mujer y a varios particulares dio con estos actos motivo bastante para la formación de causa.

Que en tal concepto la detención del mencionado vecino y la imposición de grillos con una barra candente deben estimarse como actos ejecutados por el Alcalde cuando obraba o debía obrar en concepto de delegado de la autoridad judicial o independientemente de sus funciones administrativas.

Las Secciones opinan que debe declararse innecesaria la autorización solicitada por el Juez de primera instancia de Logroño.

Y habiéndose dignado S. M. la Reina (O. D. G.) resolver de conformidad con lo consultado por las referidas Secciones, de Real orden lo comunico a V. E. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 29 de mayo de 1860.—José de Posada Herrera.—Sr. Ministro de Gracia y Justicia.

Número 395.

En la Gaceta de Madrid número 175 del jueves 21 de junio se lee lo siguiente:

Real decreto aprobando el reglamento para la concesión de las pensiones establecidas en la ley de Sanidad de 28 de noviembre de 1855.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

REAL DECRETO.

En vista de lo que me ha expuesto el Ministro de la Gobernación, de acuerdo con el Consejo de Ministros, y oído el Consejo de Sanidad del Reino,

Vengo en aprobar el adjunto reglamento para la concesión de las pensiones establecidas por los artículos 74, 75 y 76 de la ley de Sanidad de 28 de noviembre de 1855.

Dado en Palacio a 15 de junio de 1860.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de la Gobernación, José de Posada Herrera.

REGLAMENTO.

1.º Que el Alcalde de Albelda debió proceder como delegado de la Autoridad judicial desde el momento en que la conducta del vecino que maltrataba a su mujer y a varios particulares dio con estos actos motivo bastante para la formación de causa.

2.º Que en tal concepto la detención del mencionado vecino y la imposición de grillos con una barra candente deben estimarse como actos ejecutados por el Alcalde cuando obraba o debía obrar en concepto de delegado de la autoridad judicial o independientemente de sus funciones administrativas.

Las Secciones opinan que debe declararse innecesaria la autorización solicitada por el Juez de primera instancia de Logroño.

Y habiéndose dignado S. M. la Reina (O. D. G.) resolver de conformidad con lo consultado por las referidas Secciones, de Real orden lo comunico a V. E. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 29 de mayo de 1860.—José de Posada Herrera.—Sr. Ministro de Gracia y Justicia.

Número 395.

En la Gaceta de Madrid número 175 del jueves 21 de junio se lee lo siguiente:

Real decreto aprobando el reglamento para la concesión de las pensiones establecidas en la ley de Sanidad de 28 de noviembre de 1855.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

REAL DECRETO.

En vista de lo que me ha expuesto el Ministro de la Gobernación, de acuerdo con el Consejo de Ministros, y oído el Consejo de Sanidad del Reino,

Vengo en aprobar el adjunto reglamento para la concesión de las pensiones establecidas por los artículos 74, 75 y 76 de la ley de Sanidad de 28 de noviembre de 1855.

Dado en Palacio a 15 de junio de 1860.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de la Gobernación, José de Posada Herrera.

REGLAMENTO.

1.º Que el Alcalde de Albelda debió proceder como delegado de la Autoridad judicial desde el momento en que la conducta del vecino que maltrataba a su mujer y a varios particulares dio con estos actos motivo bastante para la formación de causa.

2.º Que en tal concepto la detención del mencionado vecino y la imposición de grillos con una barra candente deben estimarse como actos ejecutados por el Alcalde cuando obraba o debía obrar en concepto de delegado de la autoridad judicial o independientemente de sus funciones administrativas.

Las Secciones opinan que debe declararse innecesaria la autorización solicitada por el Juez de primera instancia de Logroño.

Y habiéndose dignado S. M. la Reina (O. D. G.) resolver de conformidad con lo consultado por las referidas Secciones, de Real orden lo comunico a V. E. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 29 de mayo de 1860.—José de Posada Herrera.—Sr. Ministro de Gracia y Justicia.

Número 395.

En la Gaceta de Madrid número 175 del jueves 21 de junio se lee lo siguiente:

Real decreto aprobando el reglamento para la concesión de las pensiones establecidas en la ley de Sanidad de 28 de noviembre de 1855.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

epidemia o contagio se inutilicen para el ejercicio de su facultad de causa del extenuada de los que hayan desempeñado su profesión en beneficio del público, y a los que soliciten una pensión de 2,000 rs. anuales, mientras permanezcan inutilizados.

Art. 2.º Disfrutarán de la pensión de 5,000 rs. en los términos que expresa el artículo 74 de la ley de Sanidad, cuando los Profesores se inutilicen y se hallen comprendidos en los casos siguientes:

Haber practicado su profesión por espacio de 10 años.

Hallarse condecorado por servicios anteriores con la cruz de Beneficencia o la de Epilepsia.

Haber prestado los auxilios de la ciencia espontánea y gratuitamente o por encargo de la Autoridad, pasando a sus propias expensas de un punto sano a otro en que exista el contagio.

Art. 5.º Podrán optar a la pensión de 4,000 rs. anuales:

Los Profesores, que brindándose a prestar sus servicios gratuitamente en un pueblo epidémico, se inutilicen a consecuencia de ellos.

Los que los hayan prestado por encargo de la Autoridad sin ninguna retribución.

Art. 4.º Optarán a las pensiones de 3,000 rs. los facultativos que se inutilicen desempeñando las plazas de titulares o prestando sus servicios a invitación o por mandato de la Autoridad con la retribución correspondiente.

Art. 5.º A los Profesores solteros comprendidos en el artículo anterior, se les concederá la pensión de 2,000 rs. anuales.

Art. 6.º Las viudas e hijos habidos en legítimo matrimonio de los Profesores que fallecieron en el desempeño de sus obligaciones facultativas, disfrutarán la pensión que a éstos correspondía, al tenor de los artículos 2.º, 3.º y 4.º del presente reglamento.

Art. 7.º Después del fallecimiento de la viuda pasará la pensión a los hijos, los cuales gozarán de ella, los varones hasta salir de la menor edad, y las hembras así que tomen estado.

Art. 8.º Para solicitar de las Cortes alguna de las pensiones a que se refieren los artículos anteriores, deberá preceder la formación de un expediente a instancia de los interesados ante el Alcalde del pueblo donde hayan prestado los servicios que hubieren ocasionado su inutilización. Este expediente constará de los siguientes documentos:

1.º Certificación de tres facultativos, legalizada, en que se afirma que el aspirante a la pensión se hallaba libre, antes de empezar la epidemia o contagio a que se atribuya su inutilidad, de todo padecimiento que le ocasionara su inutilidad.

Artículo 1.º Todos los Profesores de medicina y cirugía que en tiempo de

cimiento físico que haya podido ocasionar ésta.

2.º Los títulos y diplomas ó testimonios legalizados de ellos, en que se acredite el grado del interesado en la profesión, condecoraciones, méritos y servicios extraordinarios que haya prestado en la facultad.

5.º Una información de doce testigos vecinos del pueblo, mitad pobres y mitad acomodados, en la que depongan cuanto sepan acerca de la conducta facultativa observada por el Profesor durante la existencia de la epidemia ó contagio, hasta el momento en que quedó inutilizado, á cuya información acompañarán los informes del Procurador Sindico, Junta municipal de Sanidad y un atestado del Cura párroco.

Art. 9.º Reunidos en esta forma los citados documentos, el Alcalde los remitirá con su informe al Gobernador de la provincia.

Art. 10.º El Gobernador, después de oír el dictamen del Consejo y Junta de Sanidad provinciales, elevará con el suyo el expediente al Ministerio de la Gobernación para la resolución que proceda.

Art. 11.º Los expedientes que se instruyan para conceder pensiones á las viudas y huérfanos de los Profesores que fallecieron en el desempeño de sus funciones facultativas, contendrán además de los documentos indicados, las partidas legalizadas de defunción del Profesor, la de su casamiento y la de bautismo de sus hijos.

Madrid 15 de junio de 1860.—Aprobado por S. M.—Posada Herrera.

Real orden autorizando por el término de ocho meses á D. José González Domenech para que pueda verificar los estudios de un ferro-carril, que partiendo del proyectado de Monforte y Vigo, en Redondela, termine en la ciudad de Pontevedra.

MINISTERIO DE FOMENTO.

Obras públicas.

Ilmo. Sr.: S. M. la Reina (q. D. g.) ha tenido á bien autorizar por el término de ocho meses á D. José González Domenech para que pueda verificar los estudios de un ferro-carril, que partiendo del proyectado de Monforte á Vigo, en Redondela, termine en la ciudad de Pontevedra; en el concepto de que esta autorización no confiere al petionario derecho alguno á la concesión del camino, ni á indemnización de ningún género por los gastos que los referidos estudios ocasionen, reservándose el Gobierno la facultad de conceder iguales autorizaciones á los que las soliciten, y elegir entre los proyectos que se presenten el que juzgue mas conveniente á los intereses del país.

De Real orden lo comunico á V. I. para los efectos correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 16 de junio de 1860.—Corvera.—Sr. Director general de Obras públicas.

Parte dado por el Encargado de negocios de España en Tánger, después de su desembarque.

MINISTERIO DE ESTADO.

DESPACHO TELEGRÁFICO.

El encargado de Negocios de España en Tánger al Excmo. Sr. Ministro de Estado:

Tarifa 19 de junio de 1860.—Acabo de desembarcar en Tánger. La legación de S. M. ha sido recibida con todos los honores debidos. Después del cambio de saludos entre los buques de guerra que me acompañaban y la plaza, se izó en la casa de España el pabellon español, que

fué saludado por las baterías marroquíes con 21 cañonazos. Al acercarse á tierra el bote que me conducía, la plaza hizo el saludo correspondiente á mi categoría diplomática. En la plaza me esperaba el bajo Gobernador de Tánger, acompañado del Chabli, Jefe de la guarnición, otras Autoridades y de una guardia de moros de ley, que terminada la entrevista con el Bajá, me escoltó hasta la Legación. Me han acompañado á mi entrada en Tánger, además del personal de la Legación de S. M., los Comandantes y la Oficialidad de los vapores Vasco-Núñez de Balboa y Leon.

Número 396.

En la Gaceta de Madrid número 174 del viernes 22 de junio se lee lo siguiente:

Real orden confirmando la negativa de autorización acordada por el Gobernador de Almería y solicitada por el Juez de primera instancia de Vera para procesar al Alcalde y Secretario del Ayuntamiento de Mojacar.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

Administración.—Negociado 6.º

Remitido á informe de las Secciones de Estado, Gracia y Justicia, Gobernación y Fomento del Consejo de Estado el expediente de autorización negada por V. S. al Juez de primera instancia de Vera para procesar á D. Bartolomé Flores Cervantes y D. Pedro de Grima, Alcalde y Secretario respectivamente del Ayuntamiento de Mojacar, han consultado lo siguiente:

«Excmo. Sr.: Estas Secciones han examinado el expediente en virtud del que el Gobernador de la provincia de Almería ha negado al Juez de primera instancia de Vera la autorización que solicitó para procesar al Alcalde de Mojacar D. Bartolomé Flores Cervantes y al Secretario del Ayuntamiento del mismo punto D. Pedro de Grima.

Resulta que D. Andrés Martínez Navarro, vecino de Cuevas, compareció ante el Juez mencionado en 30 de mayo de 1859 manifestando que se había establecido en Mojacar para vender géneros de algodón y bayeta, y á mediados de agosto de 55 entregó á Francisco Yañez Albacete, 267 reales en metálico para que los llevara á un pariente suyo, mercader de paños en Cuevas, y á su vez recibiese de él algunas varas de lienzo:

Que habiendo salido á los cortijos de Cuartillos, donde había de recibir de Yañez este lienzo, vió que D. Pedro de Grima Martínez, Secretario del Ayuntamiento de Mojacar, acompañado del alguacil y dos hombres mas, alegando tener orden del Alcalde, procedió al secuestro de los indicados géneros y dinero; que dispuso que se le diese una paliza á Yañez Albacete y se le quitaran algunos maravedís que tenía en la faja:

Que habiendo regresado á Mojacar el denunciador fué conducido á la cárcel por el mismo Secretario, y allí permaneció cuatro días en un calabozo sin que se le recibiese declaración, embargándosele además una carga de ropa hasta que salió por fiador de dicho embargo un vecino del pueblo:

Que por último, no habiendo podido conseguir que se le devolviesen los géneros ni el dinero á pesar de haber promovido un juicio de conciliación, denunciaba estos hechos al Juzgado:

Que llamado á declarar Yañez Albacete, manifestó que habiéndose dedicado, mientras el cólera tenía invadido el pueblo de Cuevas, á llevar las ropas sucias de este pueblo á Mojacar, le entregó en efecto un mercader dos piezas de lienzo, una de muselina y otra de bayeta; y temiendo que la Autoridad registrase tales géneros los pusiera en cuarentena, los escondió en un monton de cañas de maíz en el cortijo de

Cuartillos, y mandó un recado al denunciador Andrés Martínez, á quien debía entregarlos, para que viniese á recogerlos, lo que se realizó dándole al mismo tiempo una esquila y 267 rs. para el mercader de quien los había recibido:

Que al mismo tiempo llegó el Secretario del Ayuntamiento de Mojacar, con otros tratando de averiguar si el declarante conducía ropas sucias, y entonces este escondió en el monton donde estaban los géneros, la ropa sucia que había llevado y el dinero y esquila que acababa de recibir:

Que le mandó el Secretario sacarlo que había escondido, y sacó solo la ropa sucia; después de lo que, de orden del mismo Secretario, se prendió fuego á las cañas de maíz, operacion que, así como lo ocurrido anteriormente, no prescindió ya el denunciador Martínez Navarro:

Que esta declaración está confirmada por otras varias que contradicen también lo expuesto en la denuncia, y en dos de dichas declaraciones se añade que efectivamente mandó el Alcalde detener al Martínez Navarro por dos días no completos por no haber presentado carta de vecindad, y se le retuvieron los géneros que tenía á la venta por no estar inscrito en la matrícula de subsidio; pero que habiéndole abonado un vecino de responsabilidad, fué puesto en libertad y se le devolvieron los géneros:

Que pedida la autorización de que se trata de acuerdo con el parecer del Promotor fiscal, el Gobernador la denegó fundándose con el Consejo provincial en que lejos de haberse comprobado los hechos denunciados, todas las declaraciones que obran en autos les son contrarias; y que el Alcalde, que debía hacer cumplir un acuerdo de la Junta municipal de Sanidad para que no entrasen ropas sucias en el pueblo y atender á las quejas y denuncias que sobre este particular se le hiciesen pudo también detener al Martínez Navarro como medida preventiva, según lo que dispone la regla 27 de la ley provisional para la aplicación del Código penal, y retener los géneros que vendía dicho hombre, sospechoso por carecer de cédula de vecindad y de matrícula de subsidio correspondiente á la industria que ejercía:

Visto el párrafo duodécimo del art. 7.º del Código penal, que declara exento de responsabilidad criminal al que obra en virtud de obediencia debida:

Vista la regla 27 de la ley para la aplicación del Código penal citado, al tenor de la que las Autoridades y sus agentes están obligados á detener ó mandar detener á las personas que según fundados indicios fueran reos de delitos de cuya perpetración tuvieran conocimiento, y lo mismo deberán hacer con los responsables de faltas si fuesen personas desconocidas:

Considerando:

1.º Que el Secretario del Ayuntamiento de Mojacar obró en virtud de obediencia debida al Alcalde en cuantas medidas ejecutó, y no solo no se ha comprobado el cargo hecho en la denuncia de haber mandado dar una paliza á Yañez Albacete, quitándole algunos maravedís de la faja, sino que éste mismo no hace mención de tales hechos en su declaración y añade que el que los denunció no estaba ya presente cuando pudieron ocurrir:

2.º Que los únicos actos que se reputan censurables de parte del Alcalde, y son la detención del denunciado Martínez Navarro y retención de sus géneros, se justifican con arreglo á la disposición citada de la ley para la ejecución del Código penal, toda vez que consta que el detenido es persona desconocida y reo evidente de faltas por carecer de la cédula de vecindad y de matrícula para ejercer su industria:

3.º Que según todas las declaraciones, la detención duró dos días no completos, y fué alzada tan luego como un vecino de responsabilidad abonó al detenido, devolviéndosele entonces sus géneros, todo lo

que justifica mas aun la conducta del Alcalde:

Las Secciones opinan que debe confirmarse la negativa acordada por el Gobernador de Almería.»

Y habiéndose dignado S. M. la Reina (Q. D. G.) resolver de conformidad con lo consultado por las referidas Secciones, de Real orden lo comunico á V. S. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de junio de 1860.—Posada Herrera.—Sr. Gobernador de la provincia de Almería.

Real orden confirmando la negativa de autorización acordada por el Gobernador de la provincia de Burgos, y solicitada por el Juez de primera instancia de Sedano para procesar al ex-Alcalde de Tubilla del Agua.

Remitido á informe de las Secciones de Estado, Gracia y Justicia, Gobernación y Fomento del Consejo de Estado el expediente de autorización negada por V. S. al Juez de primera instancia de Sedano para procesar á D. Ciriaco de la Garza, Alcalde que fué de Tubilla del Agua, han consultado lo siguiente:

«Estas Secciones han examinado el expediente en virtud del que el Gobernador de la provincia de Burgos ha negado al Juez de primera instancia de Sedano la autorización que solicitó para procesar al Alcalde que fué de Tubilla del Agua en 1858 D. Ciriaco de la Garza.

Resulta que en 15 de setiembre de 1858 dirigió el mencionado Gobernador al Alcalde de Tubilla una comunicación con copia de una Real orden en que se declaraba en su fuerza y vigor cierto contrato celebrado por dicho pueblo con un farmacéutico, y prevenia en su consecuencia el Gobernador que tanto el Ayuntamiento como los pedáneos dispusieran se hiciese el inmediato pago al indicado farmacéutico:

Que en 28 del mismo mes de setiembre, y á consecuencia de estas órdenes, aprobó el Ayuntamiento de Tubilla un repartimiento para verificar dicho pago, y se acordó su exacción:

Que después de verificada se presentó ante el Juez de Sedano una denuncia contra el Alcalde, haciendo á este funcionario los tres cargos siguientes:

1.º Haber exigido las fanegas de grano con que se había de pagar al farmacéutico antes de la época en que empezaba á seguir el convenio celebrado:

2.º Haber recogido 28 fanegas, cuando solo 26 eran las que se habían de pagar:

Y 3.º Haber comprometido á todos los vecinos en el ajuste, á pesar de que solo debía haberse hecho para los vecinos pobres:

Que después de practicadas muchas diligencias por el Juzgado, dictó de acuerdo con el Promotor fiscal, auto de sobreseimiento fundado en que, lejos de haberse probado los extremos de la denuncia, aparece que no son ciertos:

Que revocado este auto por la Audiencia del territorio, mandó este Tribunal devolver las diligencias al Juzgado para que procediese con arreglo á derecho, y pidió el Juzgado la autorización de que se trata, sin que ni uno ni otro Tribunal haya formulado razonamiento propio en sus decisiones respectivas:

Que el Gobernador, de acuerdo con el parecer del Consejo provincial, ha negado la autorización fundándose en que el Alcalde no hizo, mas que cumplir las órdenes que le comunicase y un acuerdo de la Municipalidad, debiendo por lo tanto dirigirse á su superior gerárquico toda reclamación que se refiera al modo y forma de dar cumplimiento á la citada orden:

Considerando que según el mismo Juez reconoció no se han probado en manera alguna los cargos hechos en la denuncia y además no aparece ni los Tribunales han apreciado ninguna falta cometida por el Alcalde de Tubilla del Agua indepen-

dientemente del cumplimiento de las órdenes que su superior dice le comunicó y obran en el expediente, y por lo tanto todas las reclamaciones que se estimen procedentes deben dirigirse al Gobernador, que es su superior inmediato.

Las Secciones opinan que debo confirmarse la negativa acordada por este funcionario.

Y habiéndose dignado S. M. la Reina (Q. D. G.) resolver de conformidad con lo consultado por las referidas Secciones, de Real orden lo comunico á V. S. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de junio de 1860.—Posada Herrera.—Sr. Gobernador de la provincia de Burgos.

Número 397.

En la Gaceta de Madrid número 173 del 23 de junio último se lee lo siguiente:

Reales decretos admitiendo la dimisión del cargo de Fiscal de imprenta de Madrid á D. José Indalecio Caso y nombrando en su lugar á D. Saturnino Alvarez Bugallal.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

REALES DECRETOS.

Vengo en admitir á D. José Indalecio Caso la dimisión que me ha presentado del cargo de Fiscal de imprenta de Madrid, quedando satisfecha de la inteligencia y lealtad con que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á 8 de junio de 1860.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de la Gobernación, José de Posada Herrera.

Vengo en nombrar Fiscal de imprenta de Madrid á D. Saturnino Alvarez Bugallal, Diputado á Cortes.

Dado en Palacio á 15 de junio de 1860.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de la Gobernación, José de Posada Herrera.

MINISTERIO DE ESTADO.

Cancillería.

El día 26 del próximo pasado mayo el Señor D. Manuel Rancés y Villanueva, Enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario de S. M. en Francfort y Berna, tuvo la honra de presentar en Darmstadt á S. A. R. el Gran Duque de Hesse y Rhin la carta Real que le acredita al propio tiempo y con el mismo carácter de Enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario de S. M. en aquella Corte.

El Sr. Rancés fue recibido con las formalidades de costumbre y los honores debidos á su categoría, y mereció las mas lisonjeras atenciones, tanto á S. A. R. como á toda la familia Gran Ducal, á cuya mesa fué convidado acto continuo después de la audiencia. En esta S. A. R. le manifestó las mayores muestras de simpatía hacia S. M. la Reina y hacia la nación española, así como su deseo de fomentar las amistosas relaciones que existen entre ambos países.

CUARTA SECCION.

Juzgado de primera instancia de Orense.

Don Francisco Rodriguez Rapela, escribano supernumerario del juzgado de primera instancia de Orense.—Certifico que el incidente de pobreza promovido por D. Francisco Cancela Martinez, vecino de esta capital, fue decidido por la sentencia que á la letra dice: En la ciudad de Orense á 18 de junio de 1860; el Señor D. Bernardo Maria Hervás, juez

de primera instancia de este partido, habiendo visto este incidente promovido por D. Francisco Cancela Martinez, su procurador D. Benito Carralbal, sobre que se le declare pobre para litigar con Don Rufino Saenz, D. José Seijo, Don Manuel Varela y D. Francisco Perez, en el que tambien es parte el ministerio público.

Resultando que formulada la demanda de pobreza, se cursó traslado por sexenio á los demandados á la que se opusieron los Seijo, Saenz y Varela á medio del procurador D. Ramon Francisco Armada y el promotor fiscal, manteniéndose en rebeldía el D. Francisco Perez.

Resultando que recibido el expediente á prueba después de haberse articulado para ella lo que tuvieron por conveniente por los procuradores Carralbal y Armada, no se suministró otra mas que las compulsa de los folios 33 vuelta al 50 que ningún resultado favorable ofrecen al objeto de la presente demanda, no obstante de haberse prorrogado el término al máximo de la ley.

Considerando por ello que el demandante no justificó como debia los extremos de la demanda:

Fallo que debo declarar y declaro no haber lugar á la defensa por pobre solicitada por D. Francisco Cancela Martinez á quien condeno en todas las costas de este incidente y al reintegro del papel del sello de pobres, consumido con el del competente notificándose esta sentencia por lo respectivo al demandado Don Francisco Perez que ha permanecido en rebeldía en los términos prescritos en el art. 1.190 de la ley de Enjuiciamiento civil, remitiéndose testimonio de la misma al Sr. Gobernador civil con atento oficio para su insercion en el Boletín oficial de la provincia:

Así por esta sentencia definitivamente juzgando lo pronunció, mandó y firma S. S. de que yo escribano doy fé.—Bernardo Maria Hervás.—Antemi, Francisco Rodriguez Rapela.

Y para que conste en virtud de lo mandado, expido el presente que firmo en este pliego entero sello que se reconoce en Orense á 19 de junio de 1860.—Francisco Rodriguez Rapela.

Idem de Trives.

Don Andrés Barba, escribano de número de la Puebla de Trives.—Certifico que en el pleito de que hace mérito, recayó la sentencia definitiva que á la letra dice así: En la Puebla de Trives á 11 de mayo de 1860, el Sr. D. Leonardo Casanova, juez de primera instancia de esta villa por antemi el escribano dijo:

Vistos los autos de juicio ordinario entre D. Juan Valcarcel, su procurador Don José Alvarez de una parte, y de la otra D. Javier Vazquez Guitian, el suyo Don Carlos Maria Quevedo, Rosa Armesto viuda de Jacinto Perez con sus hijos Francisco, Julian, Juan, Antonia y Maria Rosa y su nieto Manuel representados por D. Pedro Alvarez; José y Bernarda Perez tambien hijo y nieta en rebeldía:

Resultando que por el Valcarcel se propuso demanda para que se le declarase señor del dominio directo de veinticuatro cavaduras de viña titulada de Camba en los términos de San Pedro de Alais y ocho mas en la cuesta de este último punto y responsables al D. Javier y Jacinto, llevadores de las mismas, de canon anual de diez y siete ferrados de centeno y tres ducados de vellon, condenándoles en consecuencia al pago de todos los atrasos vencidos y que se venzan, fundado en que siendo descendiente por línea recta y heredero de D. Bernardo del Castillo y su muger D. Francisca Varela, estos en sus dias subforan dichas viñas por la expresada pensión segun lo comprobaban dos copias de escrituras públicas que acompañó; y

en que hallándose en la posesion de aquellos deben responder de cuanto por tal concepto se le adeude, en razon á que el contrato de subforo es válido y les alcanza la obligacion de su cumplimiento:

Resultando que por el Vazquez y Julian Perez se alegó la excepcion dilatoria de defecto legal en el modo de proponer la demanda, la que fue en parte estimada por haber fallecido el Jacinto mandando se emplazasen tambien la viuda y sus hijos:

Resultando que efectuado este emplazamiento todos los demandados dejaron transcurrir los términos prescritos para contestar la demanda, y se declaró por contestada:

Resultando que el demandante insistió en lo pedido y alegado:

Resultando que el Vazquez Guitian en escrito de duplica, se opuso excepcionando que si bien poseia en los límites descritos en la demanda cuatro cavaduras de viña, las comprara á Pedro de Castro el que pagando únicamente tres ferrados de centeno, la redimiera otorgando la redencion el padre del demandante, que con este contrato justificado por la copia de la escritura que presentaba, se habia consolidado el dominio útil y el directo y que sin posesion de percibir el exceso de renta reclamado en mas de cien años prescribiera la accion mal apoyada en documentos con los cuales no estaba conforme:

Resultando que los demas demandados confesando contribuian con 28 reales de renta anual, se opusieron igualmente por no ser poseedores de tanto terreno como en contrario se suponía por haberlo adquirido libre de Josefa Blanco, por no pagar jamas medida alguna de centeno: hechos que probaban quedar extinguida por convencion de las partes esta última renta: dado el supuesto de existir legalmente y ser improcedente la accion prescrita ya; concluyendo en mérito de semejantes fundamentos corroborados con tres copias de escrituras que acompañaban á que se les absolviese previa citacion de la Josefa:

Resultando que ésta no se apersonó: Resultando que el demandante en trámite de prueba y con el juramento exigido, presentó otras dos copias de escrituras para mejor inteligencia de su interrogatoria:

Considerando que los documentos presentados por ambas partes vinieron al juicio sin citacion ó mandamiento compulsorio á pesar de que no se prestó asentimiento expreso á ellos por las mismas:

Considerando que cualquiera que sea su valor moral, unos y otros son ineficaces por las terminantes prevenciones del art. 281 de la ley de Enjuiciamiento civil:

Considerando que el demandante no justificó cumplidamente que hubiesen perecido por incendio los archivos de los escribanos que autorizaron los documentos mencionados de que hizo uso, no identificó la firma de los autorizantes y no practicó después de aquel diligencia alguna para la validacion:

Considerando que tampoco identificó cual debia las fincas subforadas, ni probó por testimonio de testigos su demanda:

Considerando que el Julian y consortes confesaron pagar la pensión anual de 28 rs., gravámen con que adquirieron los bienes afectos:

Fallo que debo declarar y declaro á Don Juan Valcarcel dueño del dominio directo de los bienes que en la cuesta de Alais, confiesan el Julian y consortes poseer con la carga anual de 28 rs., y á estos con los rebeldes José y Bernardo responsables de su pago con el de todos los atrasos que adeuden absolviéndoles en lo demas y al Don Javier Vazquez Guitian de la demanda, sin hacer especial condenacion de costas.

Y por esta sentencia definitivamente juzgando, así lo manda y firma dicho señor juez de que yo el escribano doy fé.

—Leonardo Casanova.—Ant. mi. Andres Barba.

Y para que publicandose en el Boletín oficial de la provincia de Orense, lleguá noticia de los rebeldes José y Bernarda Perez, expido y firmo en cuatro hojas rubricadas del sello 3.º, el presente testimonio estando en la Puebla de Trives á 12 de mayo de 1860.—Andres Barba.

Idem de Orense.

En la ciudad de Orense á 20 de junio de 1860, el Sr. D. Bernardo Maria Hervás, Caballero de la Real y distinguida orden de Carlos III, y Juez de primera instancia en la misma y su partido, habiendo visto este pleito tercera de dominio propuesta por Manuela de la Cruz, viuda y vecina de san Pedro de Moreiras, en el distrito de Toen, su procurador don Antonio Blanco, contra Ramon Nogueira, su hijo, representado por el curador Camilo Cortiñas, de la misma vecindad, y el acreedor de este Licenciado don Ulpiano Navas que lo es de esta capital, ambos en rebeldía, sobre mejor derecho á los bienes embargados y á los demas que relaciona en la que ocupa los cuatro primeros folios, como de su capital:

Resultando que en 5 de enero de este año se formuló la explicada demanda á nombre de la Manuela de la Cruz, pretendiendo se declarasen de su pertenencia los bienes que comprende el memorial producido, y excluyesen del embargo los que lo fueran con la egecucion despachada á instancia del don Ulpiano Navas para pago de cantidad de reales por atrasos de renta que debe percibir anualmente de los bienes que quedaron de José Nogueira Saco, marido que fué de la Manuela y padre del Ramon:

Resultando que admitida la accion y conferido traslado con emplazamiento á los demandados fueron diligenciados por primera y segunda vez en virtud de nuevo mandamiento, mas sin embargo no se apersonaron á contestarlo ni á exponer cosa alguna de su derecho, motivo por que declarados en rebeldía se sustanció el procedimiento con los estrados de esta audiencia:

Resultando que recibido á prueba por la demandante, se suministró la testifical y documental que le convino á tenor de los extremos articulados:

Considerando que por ellas se han justificado los particulares propuestos, y especialmente que los predios sujetos al pago de la renta y atrasos reclamados radican al sitio nombrado Outeiro del Oso, término de la parroquia de Moreiras, y pertenecen al Ramon Nogueira por herencia de su difunto padre José, sin que la Manuela fuese llevadora de porcion alguna:

Fallo:

Que debo de declarar y declaro del capital de la Manuela de la Cruz los bienes que se mencionan en la relacion que ocupa los cuatro primeros folios de este pleito y por lo tanto de su exclusiva pertenencia, y exentos por consecuencia los que se señalan secuestrados al final de la expresada relacion, del que se hiciese por virtud del despacho mandamiento de pago expedido en 24 de setiembre del año próximo pasado á solicitud del don Ulpiano conforme á lo acordado en providencia del día anterior que obra al folio 36 de la primera pieza, mandando que el depositario los deje á su disposicion con los frutos que hayan producido, continuándose el procedimiento de apremio con las demas que pertenecen al Ramon Nogueira como heredero de su padre José de quien dimana el débito.

Hágase notorio esta sentencia por medio de edicto en la forma prevenida en el artículo 1190 de la ley de enjuiciamiento y se publique en el Boletín oficial de la provincia, para lo cual se remita copia testimoniada al Sr. Gobernador civil.

Así definitivamente juzgando con imposicion de costas á la demandante por cuen-

Es copia literal de la sentencia inserta que obra en el pleito de su referencia á que me remito.

Y para que conste en virtud de lo mandado expido el presente que firmo en este pliego papel de pobres por estar así declarada Manuela de la Cruz, en Orense á 21 de junio de 1860. Manuel Casar.

Don José Conde, secretario inteno del juzgado de paz de la villa de Allariz. —Certifico que en este dicho juzgado de paz pendió expediente de juicio verbal a instancia de D. Antonio Puga, vecino de Junquera de Ambia, alcaide del mismo, nombre, perteneciente a este partido, contra D. Rosa Fernández y su marido D. Mamed Vazquez, sobre reclamacion de 200 rs. que ha prestado a Josefa Dominguez, difunta y vecina que fué de Turzás, madre de aquella, en cuyo expediente se dictó una sentencia que dice:

Resultando que D. Antonio Puga, vecino de Junquera de Ambia, propuso demanda contra D.^a Rosa Fernandez, vecina de Turzás, para que como heredera de su difunta madre Jos. fa. Dominguez le pague la cantidad de 280 rs., resto de 500 que le habia prestado a esta:

Resultando que el demandante en vista de lo contestado por la demandada, pidió en la misma acta que se celebró en 14 del corriente fuese citado el marido de la misma por medio de exerto al señor juez de paz de Bande, para que concurriese al juicio para el día y hora que el juzgado tuviese a bien señalar:

Resultando que en la continuación de juicio, a pesar de haber sido citado el Don Mamed Vazquez en persona, no ha comparecido a excepcional cosa alguna, ni menos su mujer la D.^a Rosa Fernandez, por lo que se les declaró rebeldes, y

Falla: Que debe condenar y condena al Do.
Mamed Vázquez y a su mujer D.^a Rosa
Fernández, como heredera de su madre
la Josefa Dominguez, a que dentro del tér-
mino de sexto día paguen con las costas
de este juicio los 280 rs. al D. Antonio
Puga, bajo apercibimiento de proceder
ejecutivamente contra los bienes que que-
daron de la Josefa Dominguez.

Y para que tenga efecto, la inserción en el Boletín oficial de la provincia, con arreglo al art. 1190 de la Ley de enjuiciamiento civil, y en virtud de lo mandado expando el presente que firmo en este pleito entero del sello tercero, breví el Visto

[illegible]

Presentado con la copia que se acompaña, a este juicio verbal a Francisco Colvigiro por medio de edictos que se fijarán en las puertas de esta Audiencia y en el Boletín oficial de la provincia a cuyo fin se remite a la Santa Comunicación al Señor Gobernador, señalando para la celebración del juicio el día sexto hábil siguiente al del en que se verifique la publicación ó inserción en dicho periódico oficial y hora de diez de su mañana en la Audiencia de este juzgado. Lo mandó y firmó el Licenciado D. Jacinto Talpoda, Jefe de paz de Cayash, a 11 de mayo del 860. — *Jacinto Talpoda. — José Al-*

Don Francisco Yáñez Rodríguez, secretario del juzgado de paz de la villa de Celanova etc. — Certifico que en este juzgado se propuso demanda de juicio verbal por Domingo Ojea, labrador y vecino de Milamanda, contra Manuel Fernández (a) Perendengue, de Vilaverde, en reclamación de 80 rs. en el que recayó la sentencia siguiente: Celanova, julio 12 de 1880.

Considerando que el Oja por la prueba que ha traído a los autos, justifica la existencia del contrato con el Fernandez

(3) Perendureno:

Fallo que debo de condenar y condeno a Manuel Fernandez (a) Perendengu al pago de 80 rs. reclamados y costas a cuarto dia, haciendose saber esta providencia personalmente al Ojea y en estrados al demandado y tambien por edictos en el periodico oficial de esta provincia, para lo cual se forme y remita el competente al Sr. Gobernador civil de la misma.

Y por esta sentencia definitivamente
juzgando en primera instancia lo pro-
nuncia manda y firma el Sr. D. Ricardo

Es el presente que libro y firma a los
 fines expresados: Celanova, junio 14 de
 1880. — Francisco Vaquer Rodríguez
 — V. B.; Ricardo Rodríguez Marquina
 Hija de José G. G. Rodríguez Marquina

cio, a los vecinos y terratenientes en el

y 23 de la Real Instrucción de 15 de
junio de 1845; en la inteligencia que
no habiéndolo en el referido término
incurrirán en las penas marcadas en el
artículo 24 de la citada Instrucción. Mer-
ced 26 de junio de 1860.—El Alcalde
Presidente, *Ramon Cardero*.—Por acuer-
do del Ayuntamiento, *Antonio Avila*
secretario.

IMPRESA DE D. CESAREO PAZ Y H.
CALLE DE SAN JUAN, 10.